

El Tiro de Gracia

Las Inundaciones: La Peor Catástrofe Natural en Chiapas

(Segunda y última parte)

GUSTAVO CASTRO SOTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO; 20 DE SEPTIEMBRE DE 1998

LA RADIOGRAFÍA POLÍTICA

Los municipios que actualmente se encuentran afectados por el desastre natural en las zonas Sierras y Costa de Chiapas, forman parte de un movimiento de oposición que no es nuevo, que data desde la década de los 30 con el gobierno de Lázaro Cárdenas. Cuando se instaura el Gobierno de Transición en Rebeldía encabezado por Amado Avendaño Figueroa en 1994, estos municipios participaron muy activamente en la resistencia civil: bloqueos de carreteras, en el no pago de servicios de energía eléctrica, en el desconocimiento de las autoridades nombradas por el gobierno y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como señal de protesta por la imposición del exgobernador Eduardo Robledo Rincón. La resistencia tuvo tres grandes vertientes organizativas: las organizaciones sociales independientes que hasta hoy se coordinan en lo que es el Frente Amplio de Organizaciones para la Liberación Nacional (FAO-LN), compuesta por unas 23 organizaciones con presencia en el Soconusco; la segunda, fueron los Frentes de Resistencia Civil, que son aproximadamente 7 y que abarcan principalmente la zona Istmo Costa y la Sierra; y la tercera, fue la participación de estos dos grandes movimientos en los procesos electorales de 1995.

Como producto de las elecciones municipales de 1995, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), tercera fuerza nacional y la segunda estatal, ganó los siguientes municipios: Pijijiapan, Escuintla, Mazatán, Suchiate, Mazapa de Madero y Amatenango de la Frontera. El PRI y el gobierno lograron imponerse en Villa Comaltitlán, Mapastepec, Tuzantán, Acacoyagua y Huehuetán; por supuesto que el movimiento de resistencia y de protesta popular fue muy fuerte, pero fueron debilitados a través de la represión con la policía. El Partido de Acción Nacional (PAN), segunda fuerza nacional y tercera estatal, gobierna los municipios de Tonalá y Huixtla solamente, y el resto de los municipios son gobernados por el PRI.

Una gran parte del movimiento social que no participa en los partidos políticos, ahora son parte de la resistencia civil que se han articulado al proyecto de los Municipios Autónomos Zapatistas. Este movimiento que ha crecido en la Costa y la Sierra, tienen como punto de referencia y de articulación de la resistencia la oficina auxiliar rebelde de la comunidad Belisario Domínguez, municipio de Motozintla, que está dentro de la jurisdicción del municipio de “Tierra y Libertad”, antes Amparo Aguatinta. La comunidad Belisario Domínguez fue destruida en un 60% por el desastre natural.

LAS CONDICIONES DEL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL

El próximo 4 de octubre habrán elecciones en Chiapas, para elegir a 111 presidentes municipales; para 24 Diputados Locales y 16 de Representaciones Plurinominales, donde

contenderán los partidos con presencia federal: PAN, PRI, PRD, PT, PVEM; y con presencia estatal: el Partido Democrático Chiapaneco (PDCH) y el Partido del Frente Cívico Chiapaneco (PFCH).

Infraestructura: una gran parte de la población perdió sus credenciales de elector, el proselitismo de los partidos políticos se suspendió en el momento en que los caminos y carreteras destruidos hicieron inaccesibles el recorrido por los distintos lugares. Las casillas serán más difíciles de poder hacerse llegar a los lugares apartados y, por lo mismo, los resultados electorales no serán entregados en los tiempos en que marca la Ley Electoral. La población directamente afectada tiene que velar primero por sus necesidades prioritarias como la recuperación de sus bienes perdidos y la reconstrucción de sus viviendas, antes que interesarse por el proceso electoral.

Además de que han empezado a aparecer de manera masiva las enfermedades de conjuntivitis, diarreas, gripas, tos, calenturas, etc., según el Servicio de Emergencia de Sanidad, reporta que tan solo en Pijijiapan, son más de 600 casos de Conjuntivitis.

Desplazados: La situación de los damnificados por el desastre natural es muy parecida a la de los desplazados por la violencia política de las zonas de los Altos, la Selva y el Norte, porque la mayoría de ellos huyó por la violencia de los paramilitares que les quemaron sus pertenencias, entre ellas sus credenciales de elector. Tan sólo en la zona de los Altos son alrededor de 10 mil personas y en la Selva y el Norte son otros 10 mil desplazados. La mayoría de ellos no cuenta con credenciales de elector. No salen a trabajar tan fácilmente porque los paramilitares merodean los campamentos y tampoco participaron en procesos de selección de candidatos porque las condiciones en que viven no se los permite.

Paramilitares: Si a esto le sumamos el control de caminos y carreteras que ejercen los paramilitares que pertenecen al PRI, en unos 20 municipios donde operan 12 grupos, es casi seguro que el PRI obtendrá el triunfo, porque habrá presión para que el voto sea ejercido en favor del partido oficial. Basta solo mencionar que tan solo en los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá y Salto de Agua, todos los candidatos del PRI son miembros del presunto grupo paramilitar “Paz y Justicia”, impuestos con amenazas de muerte dentro de la selección interna. Los comerciantes locales y militantes del PRI que no pertenecen a Paz y Justicia fueron desplazados y amenazados de muerte para que renunciaran a un puesto de elección popular.

Los paramilitares se mueven en dos tiempos principalmente, en las temporadas de cosechas de café, maíz, frijol, etc., dependiendo de las regiones, con la finalidad de destruir la economía y la resistencia de las comunidades indígenas de la oposición; y en tiempos de elecciones para controlar las presidencias municipales desde donde se fortalecen y encuentran más apoyo. El caso más evidente es el de los municipios de Tila y Sabanilla. Pero también con la finalidad de recibir apoyos desde las esferas oficiales para recuperar los espacios políticos que el PRI ha ido perdiendo.

Militarización: A la falta de condiciones para el proceso electoral le sumamos la excesiva militarización y control policiaco en Chiapas, que aproximadamente son unos 60 mil soldados y unos 5 mil elementos de la policía de Seguridad Pública distribuidos en 257 campamentos y retenes en el estado, ubicados principalmente donde hay mayor oposición al PRI y al gobierno. La sola presencia militar ubicada en escuelas, a orillas de las comunidades, en retenes permanentes e intermitentes en lugares estratégicos, intimidan a la

población. Además, es de preverse que muchos de los militares tendrán la posibilidad de votar en las zonas donde se encuentran

Represión: Desde unos cuatro meses el gobierno del estado llevó a cabo una serie de acciones represivas en contra de los presidentes municipales de la oposición, principalmente donde gobierna el PRD, como fueron en los municipios de Ixtapa, Jitotol, Nicolás Ruiz, Soyaló, Ocosingo, etcétera; o donde la presencia de algunas organizaciones campesinas es fuerte, como es el caso de la CIOAC en Soyaló, lugar donde esta organización participó activamente en el proceso electoral pasado, obligando al candidato del PRI a ejercer su administración desde una comunidad, ya que la cabecera municipal estuvo tomada durante unos meses. Otros mecanismos han sido las órdenes de aprehensión que amenazaron con ejercer contra Nicolás López Gómez, Santiago Lorenzo, Juan Vázquez y Porfirio Encinos, dirigentes de la COAO en Ocosingo, la destitución del presidente municipal de Altamirano, etc. Además de encarcelamientos de dirigentes campesinos en distintos municipios donde se prevé que puede triunfar la oposición.

PROCAMPO y PROGRESA: El clientelismo político sigue siendo como siempre, la entrega de recursos a cambio de que la gente vote por el PRI, los casos concretos son los siguientes: en los municipios de la Sierra como La Grandeza, Siltepec y Bella Vista, funcionarios de distintas instancias gubernamentales y del Programa PROGRESA, se coordinan para reclutar personas a favor del PRI entregando 190 pesos por persona y duplicando la cantidad si a su vez reclutan a dos más. Durante la Misa de las 10 de la mañana del 23 de agosto en el municipio de Siltepec, el párroco del lugar manifestó su inconformidad porque la Secretaría de Salud en el municipio estaba pretendiendo utilizar a los catequistas en esta campaña.

En el municipio de Ocosingo, Altamirano y Oxchuc, indígenas de la oposición han denunciado que funcionarios del Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) para el “combate integral” a la pobreza, exigen a la población su credencial de elector y su clave, para entregarles el crédito.

En Nicolás Ruiz, los Comuneros en Asamblea decidieron elegir al candidato para la presidencia municipal por el PRD, mientras que los dirigentes locales del PRI recogen las credenciales de elector a cambio de dinero y la entrega de pollos. El presidente municipal de Huixtla también denunció que desde la Secretaría General de Gobierno se está canalizando ayuda para los damnificados a cambio de que en las próximas elecciones voten por el partido oficial.

En la zona de la Costa la ayuda humanitaria siendo utilizada con fines proselitistas por parte del PRI y del Partido del Trabajo (PT), tal como lo denunciaron los centros de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” y “Fray Matías de Córdoba” de Tapachula, en el sentido de que en Tonalá el candidato del PRI está guardando la ayuda humanitaria en su casa de campaña.

Estas son algunas de las condiciones que prevalecen en el estado y que son desfavorables para el próximo proceso electoral. Sin embargo, las posiciones de los distintos actores en Chiapas al respecto son diversas; cada quien lo maneja a su antojo para sacar las mejores ventajas.

Por tanto, debido a las malas condiciones de escuelas, carreteras, falta de credenciales de elector tanto de los desplazados por la violencia política como los damnificados por los desastres naturales, lo inaccesible de las carreteras que no permiten una comunicación fluida para el traslado de urnas y resultados electorales, todo el estado de Chiapas está ya en conflicto, tanto por desastres naturales como por la violencia política de los grupos paramilitares y el conflicto armado en Chiapas. Se necesita una readecuación tanto de la fotocredencialización como de una buena seccionalización de casillas en todo el estado. Esta es la oportunidad para que los distintos partidos políticos y la sociedad civil asuman un papel activo en la creación de nuevos órganos de vigilancia electoral y se realicen nuevas formas de participación ciudadana en el proceso político electoral. Si la sociedad civil no participa, tanto el gobierno del estado como la Comisión Estatal Electoral, seguirán actuando en contubernio para seguir imponiendo los candidatos del PRI.

Sin embargo, es de esperarse que en algunos lugares donde han habido alianzas entre organizaciones campesinas y partidos políticos de oposición, éstos puedan triunfar, como son los casos de Chilón, Sitalá, Altamirano, Oxchuc, San Juan Cancuc, Amatenango del Valle, Chanal, Siltepec, Ixtapa, Soyaló, Bochil, Jitotol, Reforma, Pichucalco, Venustiano Carranza, Mazapa de Madero, Mazatán, entre otros.

En otros municipios donde la mayoría es población zapatista o simpatizante, es de esperarse que no participen en el proceso electoral, pero seguirán nombrando sus autoridades mediante usos y costumbres y no legitimarán el fraude electoral, si embargo, bajo su propia dinámica seguirán fortaleciendo su autonomía.

LAS REACCIONES

El presidente Zedillo realizó en una semana 4 visitas a las regiones afectadas y advirtió que sancionará y reprobará cualquier clientelismo con recursos públicos. Al mismo tiempo afirmó que es el mayor desastre natural desde el sismo de 1985.

Hasta el 15 de septiembre se informó que el Ejército Mexicano tenía trabajando 5 mil 261 elementos que sumados con los de la región hacían un total de 8 mil 239 militares, con 78 helicópteros y 20 aviones de gran capacidad y ligeros que habían podido rescatar a un promedio de 666 personas. Los militares trabajan en brigadas de reconstrucción de caminos, deslaves y limpieza. Por su lado, la Marina informó que cuenta con 9 helicópteros, 20 aviones de carga, 19 vehículos, 11 lanchas, 883 marinos que sumados a los de la 22 Zona Naval, hacen un total de 2 mil 91 elementos.

Por su lado, la Cruz Roja Mexicana despliega su personal en la zona de desastre con el apoyo de 300 jóvenes voluntarios y la Comisión Nacional del Agua reporta que mil 500 trabajadores se encuentran en labores de distribución de 2 millones de agua diariamente. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) informa que este organismo gubernamental cuenta con 500 trabajadores, 434 cocinas comunitarias y 100 toneladas de alimentos para abastecer a dichas cocinas además de 70 albergues.

La empresa Nestlé donó 107 toneladas de productos alimenticios y otras empresas de igual modo realizan acopio de ayuda humanitaria como el Grupo Pulsar. Por la frontera con Guatemala llegan más de 700 toneladas de víveres y miles de litros de gasolina y turbosina así como material para la reconstrucción de la energía eléctrica. El Centro Empresarial de Chiapas puso a disposición maquinaria, vehículos, herramientas, parrillas para el cocimiento

de alimentos en albergues y gas. Así, el gobierno federal y estatal, el Ejército Mexicano y la Marina, la iniciativa privada, las organizaciones civiles, la Iglesia y la Cruz Roja, se movilizan para responder a las necesidades de los damnificados. Por otro lado, Francia decide donar 500 mil francos (83,300 dólares) para la ayuda humanitaria, mientras que el Papa Juan Pablo II dona 30 mil dólares para los damnificados.

Para el Secretario de Turismo, los desastres “curiosamente no están concentrados en las áreas turísticas como lo es Mundo Maya”, al tiempo que presenta la Cruzada Nacional por la Calidad y la Excelencia de los Servicios Turísticos.

Los obispos de San Cristóbal de las Casas, Raúl Vera López o.p. y Samuel Ruiz García, hacen un llamado a la solidaridad con los damnificados. Los donativos económicos pueden depositarse a Cáritas de San Cristóbal de las Casas, A.C., a BANAMEX, sucursal 386, en la Cuenta Maestra 55249-2, informando sobre el “depósito y su origen” a la dirección o teléfonos de dicha institución: calle Julio M. Corzo 16-A, Barrio de Santa Lucía, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; teléfono y fax: (967) 86479; e-mail: <caritasdesc@laneta.apc.org>.

El Partido de Acción Nacional (PAN) que gobierna algunos de los municipios de la región, denunció el modo como el gobierno de Albores Guillén distribuye despensas a los damnificados con criterios políticos y en franco apoyo a las campañas de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Mientras tanto, miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) denuncian de igual forma que algunos pobladores la distribución de ayuda humanitaria a cambio del voto por el PRI en las próximas campañas electorales. La rapiña, la corrupción y las acusaciones sobre la distribución de la ayuda humanitaria han causado discordias entre los damnificados.

El 8 de septiembre, el Subcomandante Marcos lanza un comunicado donde afirma que “el gobierno sólo se acuerda de Chiapas cuando necesita hacer demagogia y mejorar su imagen publicitaria. Seguro que (el presidente) Zedillo vendrá a la costa suroriental a esconder muertos, prometer ayudas, tomarse fotos, repartir croquetas y a ocultar omisiones y negligencias”. Más adelante declara: “Acá el gobierno sabe matar indígenas, pero no no evitar que se mueran (...) Así es ahora con los indígenas en México: sólo muertos existen y son nombrados”, haciendo referencia al silencio del presidente Zedillo en su IV Informe de Gobierno el pasado 1o. de septiembre.

PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Los diagnósticos de la sociedad y del gobierno sobre el país y en particular sobre Chiapas siguen sin confluir. Así, desde la masacre de Acteal en diciembre de 1997 y los 9 meses de 1998, en cada mes, Chiapas ha sufrido fuertes golpes: el mes de los derechos humanos para unos o del combate a la “injerencia extranjera” para otros (las expulsiones de extranjeros), o el mes de la dignidad y la autonomía o del restablecimiento del “estado de derecho” (de los operativos policiaco militares contra los municipios autónomos), el mes de la resistencia o del “imperio de la ley” (de los presos), el mes de los mártires y de los muertos o el de las “pérdidas lamentables” (la masacre de Acteal y de El Bosque), el mes de la traición o el del “cumplimiento” (de la propuesta unilateral de ley del Presidente sobre los Derechos y Cultura Indígenas), el mes del fin de la Mediación o de la “autodisolución” (el fin de la CONAI), el mes del silencio y “autismo” presidencial o del “avance” democratizador (el IV Informe Presidencial), el mes de la devastación forestal sin precedentes o de la “poca

conciencia ecológica” de los campesinos (los incendios), etcétera. Para unos, el IV informe presidencial y el día de la Independencia, convierten al mes de septiembre en el “mes de la patria”, para otros es el segundo aniversario de la suspensión del diálogo de San Andrés, para otros el mes que pasará a la historia en Chiapas y en el país por la peor catástrofe causada por las inundaciones.

El mes de octubre será otro momento clave para la entidad. El gobierno es el principal promotor de que las elecciones se lleven a cabo. ¿El mes de las elecciones?, ¿de la democracia?, ¿del “autismo” gubernamental?.

Las salidas a la solución de conflicto armado en Chiapas se complican. Con la vía del diálogo sin credibilidad, sin mediación, ¿suspendida?, ¿interrumpida?, ¿traicionada?, sin cumplimiento; con la vía de la movilización y la presión política para alcanzar las justas demandas amenazada con cárcel por el gobernador Roberto Albores por medio de su Acuerdo para la Paz y la Reconciliación que prohíbe dichas manifestaciones; con la vía político-electoral muy débil y sin las condiciones óptimas para garantizar la expresión de la verdadera voz de los chiapanecos; con la vía y la vida económica totalmente destruida, aquél corazón productivo del estado al que el gobierno apostaba como las regiones que sacarían a Chiapas de la pobreza y generarían empleos, inversiones extranjeras, mejores condiciones de vida para la población y por tanto la solución a las causas que generaron el conflicto armado con el levantamiento del EZLN.

Si raquíticos fueron los recursos anunciados para el “combate a la pobreza” antes de los recortes presupuestales al país y de la devaluación del peso que en los últimos días casi ha alcanzado 11 pesos por dólar, entre otras crisis económicas, la catástrofe de las inundaciones ha hecho retroceder muchos años más el crecimiento económico, político y social de Chiapas. Así, las causas que originaron el conflicto armado, se agudizan y cruzan las fronteras de la zona mal llamada de “conflicto” a las regiones Sierra, Soconusco, Frailesca, Centro y Costa.

No sólo la población chiapaneca se vio afectada. También sufrieron estragos los refugiados guatemaltecos dispersos en la región fronteriza con Guatemala, así como los miles de migrantes económicos en busca de trabajo en las regiones productivas del Soconusco. Es así como se le derrumba el último escalón de salvación de la política gubernamental que puso todas sus esperanzas, recursos y discursos en la región productiva del estado para combatir las causas que originaron el conflicto armado.

La masacre de Acteal y otros acontecimientos graves para Chiapas merecieron el eje del discurso gubernamental y 7 visitas del presidente Zedillo, pero que poco a poco se fueron sepultando también en el lodo del silencio hasta llegar a la grave omisión de ellos en el IV Informe Presidencial. Así, es posible que las 4 visitas presidenciales en esta semana y las graves consecuencias de esta catástrofe que no solo repercute en la vida política, social y económica de Chiapas sino del país, quede sepultada en el olvido meses después junto a los pobres y los indígenas que nuevamente ponen los muertos, sus viviendas y sus esperanzas de vida.

En medio de esta tragedia, el pueblo chiapaneco recibe la noticia de que el precio de la tortilla sube en un 15%. Otros acontecimientos suceden en estos días: la visita de Amnistía Internacional a Chiapas; el presunto grupo paramilitar “Paz y Justicia”, en voz de su dirigente y exmilitar Marco Albino Torres, niegan nuevamente ser un grupo armado; en el

municipio de Yajalón, un grupo fuertemente armado asalta a un grupo de campesinos; sube 23% las tarifas del autotransporte de carga; el gobierno llama nuevamente al diálogo al EZLN; se suspende la visita de 50 diplomáticos a Chiapas; el EZLN, en voz del Subcomandante Marcos, acepta el encuentro propuesto en días pasados por miles de firmas civiles que solicitan un diálogo para organizar la consulta nacional sobre la aceptación o no de la propuesta de Ley de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) sobre Derechos y Cultura Indígena, acuerdos firmados en San Andrés en la Mesa 1 de la negociación en febrero de 1996.